

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE  
BOGOTÁ D.C.**

**ACCIÓN DE TUTELA**

**RADICADO: 11001-41-05-008-2023-00642-00**

**ACCIONANTE: DEISSI JULIETH VERGEL SARMIENTO** en representación de su hija **SARA  
VALERIA GUERRERO VERGEL**

**ACCIONADAS: E.P.S. FAMISANAR**  
**I.P.S. CAFAM**

**SENTENCIA**

En Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), procede este Despacho judicial a decidir la Acción de Tutela impetrada por **DEISSI JULIETH VERGEL SARMIENTO** en representación de su hija **SARA VALERIA GUERRERO VERGEL**, quien pretende el amparo del derecho fundamental a la salud y a la vida presuntamente vulnerado por la **E.P.S. FAMISANAR** y la **I.P.S. CAFAM**.

**RESEÑA FÁCTICA**

Indica la accionante que a su hija **SARA VALERIA GUERRERO VERGEL** le fue diagnosticada "*cicatriz u opacidad de la córnea no especificada*".

Que el 16 de junio de 2023, la optómetra Sharith González, de la Sede Cafam de Kennedy, emitió orden para consulta de oftalmología pediátrica.

Que el sistema de la **E.P.S. FAMISANAR** fue jaqueado y, como consecuencia de ello, no tienen atención en la línea de servicios, ni funciona su página web para agendamiento de citas.

Que ha solicitado de forma presencial el agendamiento de la cita, pero que en reiteradas ocasiones le han informado que "*no hay agenda, no hay citas, no han aperturado citas para esa especialidad*".

Que en el punto de atención de Kennedy, a través de una máquina, le fue asignada la cita para el 27 de julio de 2023 a las 11:30 a.m. en la Sede Cafam de la Calle 51, pero que al asistir le informaron que la cita había sido cancelada por razones administrativas.

Conforme a lo anterior, solicita el amparo de los derechos fundamentales invocados, y se ordene a la **E.P.S. FAMISANAR** y a la **I.P.S. CAFAM** realizar el agendamiento de la “*consulta oftalmología pediátrica*” y de “*todos los tratamientos que se requieran (...) para tratar medicamente el diagnóstico de cicatriz u opacidad en la córnea*”.

## CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA

### **E.P.S. FAMISANAR**

La accionada allegó contestación el 08 de agosto de 2023, en la que manifiesta que no ha negado la prestación de los servicios solicitados por el afiliado y que, por el contrario, se encuentra validando y gestionando la autorización y la programación de los requeridos.

Que se encuentra desplegando todas las actuaciones tendientes para cumplir con la orden médica, pero que no es posible suministrar y agotar todos los procedimientos administrativos dentro del tiempo otorgado por el Despacho Judicial.

Por lo anterior, solicita se le otorgue un término razonable y prudencial.

### **I.P.S. CAFAM**

La accionada allegó contestación el 09 de agosto de 2023, en la que manifiesta que no presta el servicio de oftalmología pediátrica y que, por tanto, la autorización debe ser tramitada ante la **E.P.S. FAMISANAR**.

Por lo anterior, solicita su desvinculación.

## CONSIDERACIONES

### **PROBLEMA JURÍDICO**

Con fundamento en los antecedentes expuestos, el Despacho se plantea los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿La **E.P.S. FAMISANAR** y/o la **I.P.S. CAFAM** vulneraron los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la menor **SARA VALERIA GUERRERO VERGEL**, al no haber autorizado y programado la “*consulta oftalmología pediátrica*” ordenada por la médica

tratante? (ii) ¿Están dadas las condiciones para ordenar el tratamiento integral, a partir de los requisitos que al respecto ha señalado la jurisprudencia constitucional?

### **MARCO NORMATIVO**

Conforme el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento judicial de carácter constitucional, subsidiario, residual y autónomo, dirigido a facilitar y permitir el control de los actos u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares cuando éstos vulneren derechos fundamentales.

Esta acción constitucional puede ser interpuesta por cualquier persona, a fin de obtener la pronta y efectiva defensa de los derechos fundamentales cuando ello resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable, o cuando no exista otro medio de defensa judicial.

### **DERECHO A LA SALUD**

El artículo 48 de la Constitución Política consagra la seguridad social y la define en los siguientes términos: *“es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley”*.

Por su parte, el artículo 49, respecto del derecho a la salud, señala que: *“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley (...)”*.

Al estudiar los complejos problemas que plantean los requerimientos de atención en salud, la Corte Constitucional se ha referido a sus facetas, una como *derecho* y otra como *servicio público* a cargo del Estado<sup>1</sup>. Cada una de estas expresiones implica un ejercicio de valoración particular, en el que se debe tener en cuenta el conjunto de principios que les son aplicables. Así, en cuanto a la salud como derecho, se ha dicho que la misma se relaciona con los mandatos de *continuidad, integralidad e igualdad*; mientras que, respecto a la salud como

---

<sup>1</sup> Sentencias T-134 de 2002 y T-544 de 2002.

servicio, se ha advertido que su prestación debe atender a los principios de *eficiencia, universalidad y solidaridad*.

Al enfocarse en el estudio de la primera faceta, en la **Ley Estatutaria 1751 de 2015** el legislador le atribuyó a la salud el carácter de derecho fundamental autónomo e irrenunciable. De igual manera, estableció un precepto general de cobertura al indicar que su acceso debe ser oportuno, eficaz, de calidad y en condiciones de igualdad a todos los servicios, establecimientos y bienes que se requieran para garantizarlo, el cual se cumple mediante la instauración del denominado Sistema de Salud.

La Corte también ha destacado que el citado derecho se compone de unos elementos esenciales que delimitan su contenido dinámico, que fijan límites para su regulación y que le otorgan su razón de ser. Estos elementos se encuentran previstos en el artículo 6 de la Ley 1751 de 2015, en los que se vincula su goce pleno y efectivo con el deber del Estado de garantizar su (i) disponibilidad, (ii) aceptabilidad, (iii) accesibilidad y (iv) calidad e idoneidad profesional.

Por otra parte, en lo que atañe a los principios que se vinculan con la faceta de la salud como servicio público, es preciso recurrir a lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1751 de 2016, en donde se mencionan los siguientes: universalidad, equidad, continuidad, oportunidad, progresividad, integralidad, sostenibilidad, libre elección, solidaridad, eficiencia, interculturalidad y protección de grupos poblacionales específicos.

Para efectos de esta sentencia, se ahondará en los *principios de continuidad, oportunidad e integralidad*, los cuales resultan relevantes para resolver el asunto.

El principio de **continuidad** implica que la atención en salud no podrá ser suspendida al paciente, cuando se invocan exclusivamente razones de carácter administrativo. Precisamente, la Corte ha sostenido que “una vez haya sido iniciada la atención en salud, debe garantizarse la continuidad del servicio, de manera que el mismo no sea suspendido o retardado, antes de la recuperación o estabilización del paciente”<sup>2</sup>. La importancia de este principio radica, primordialmente, en que permite amparar el inicio, desarrollo y terminación de los tratamientos médicos, lo que se ajusta al criterio de integralidad en la prestación<sup>3</sup>.

Por su parte, el principio de **oportunidad** se refiere a “que el usuario debe gozar de la prestación del servicio en el momento que corresponde para recuperar su salud, sin sufrir

---

<sup>2</sup> Sentencias T-234 de 2013 y T-121 de 2015.

<sup>3</sup> Sentencias T-586 de 2008, T-234 de 2013, T-121 de 2015, T-016 de 2017 y T-448 de 2017.

*mayores dolores y deterioros. Esta característica incluye el derecho al diagnóstico del paciente, el cual es necesario para establecer un dictamen exacto de la enfermedad que padece el usuario, de manera que se brinde el tratamiento adecuado*<sup>4</sup>. Este principio implica que el paciente debe recibir los medicamentos o cualquier otro servicio médico que requiera a tiempo y en las condiciones que defina el médico tratante, a fin de garantizar la efectividad de los procedimientos médicos<sup>5</sup>.

Finalmente, la Ley Estatutaria de Salud, en el artículo 8, se ocupa de manera individual del principio de **integralidad**, cuya garantía también se orienta a asegurar la efectiva prestación del servicio e implica que el sistema debe brindar condiciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y todo aquello necesario para que el individuo goce del nivel más alto de salud o al menos, padezca el menor sufrimiento posible. En virtud de este principio, se entiende que toda persona tiene el derecho a que se garantice su integridad física y mental en todas las facetas, esto es, antes, durante y después de presentar la enfermedad o patología que lo afecta, de manera integral y sin fragmentaciones<sup>6</sup>.

De esta manera, en consonancia con este principio, sobre las EPS recae la obligación de no entorpecer los requerimientos médicos con procesos y trámites administrativos que resulten impidiendo a los usuarios el acceso a los medios necesarios para garantizar el derecho a la salud.

Con todo, es necesario advertir que el concepto de integralidad *“no implica que la atención médica opere de manera absoluta e ilimitada, sino que la misma se encuentra condicionada a lo que establezca el diagnóstico médico”*<sup>7</sup>, razón por la cual, el juez constitucional tiene que valorar -en cada caso concreto- la existencia de dicho diagnóstico, para ordenar, cuando sea del caso, un tratamiento integral<sup>8</sup>.

## **CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO**

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela, en principio, *“pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”*<sup>9</sup>. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de

---

<sup>4</sup> Sentencia T-460 de 2012, reiterada en la Sentencia T-433 de 2014.

<sup>5</sup> Sentencia T-121 de 2015.

<sup>6</sup> Sentencia T-121 de 2015.

<sup>7</sup> Sentencia T-036 de 2017.

<sup>8</sup> Sentencia T-092 de 2018.

<sup>9</sup> Sentencia T-970 de 2014.

supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz<sup>10</sup>.

En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y *“previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”*<sup>11</sup>. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.

En ese orden, la Corte Constitucional ha desarrollado la teoría de la carencia actual de objeto como una alternativa para que los pronunciamientos no se tornen inocuos, y ha aclarado que el fenómeno se produce cuando ocurren dos situaciones específicas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado.

Con relación a la categoría de carencia actual de objeto por hecho superado, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 lo reglamenta en los siguientes términos: *“Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”*.

La Corte Constitucional ha interpretado la disposición precitada en el sentido de que la carencia actual de objeto por hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la afectación al derecho fundamental invocado<sup>12</sup>. En efecto, si la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, cuando la perturbación que dio origen a la acción desaparece o es superada, el peticionario carece de interés jurídico ya que dejan de existir el sentido y objeto del amparo.

Luego, al desaparecer el hecho o los hechos que presuntamente amenazan o vulneran los derechos de un ciudadano, carece de sentido que el juez profiera órdenes que no conducen a la protección de los derechos. Así, cuando el hecho vulnerador desaparece se extingue el objeto actual del pronunciamiento, haciendo inocuo un fallo de fondo<sup>13</sup>.

En síntesis, el hecho superado significa la observancia de las pretensiones del actor a partir de una conducta desplegada por el transgresor. En otras palabras, la omisión o acción reprochada por el accionante, ya fue superada por parte del accionado.

---

<sup>10</sup> Sentencias T-588A de 2014, T-653 de 2013, T-856 de 2012, T-905 de 2011, T-622 de 2010, T-634 de 2009, T-449 de 2008, T-267 de 2008, T-167 de 2008, T-856 de 2007 y T-253 de 2004.

<sup>11</sup> Sentencia T-168 de 2008.

<sup>12</sup> Sentencias T-267 de 2008, T-576 de 2008, T-091 de 2009, T-927 de 2013, T-098 de 2016, T-378 de 2016 y T-218 de 2017.

<sup>13</sup> Sentencia T-070 de 2018.

Cuando se presenta ese fenómeno, la obligación del juez de tutela no es la de pronunciarse de fondo, solo cuando estime necesario *“hacer observaciones sobre los hechos que originaron la acción de tutela, con el propósito de resaltar su falta de conformidad constitucional, condenar su ocurrencia y conminar a que se adopten las medidas necesarias para evitar su repetición, so pena de las sanciones pertinentes<sup>14</sup>. De cualquier modo, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que en la sentencia se demuestre la reparación del derecho antes de la aprobación del fallo, es decir, que se demuestre el hecho superado<sup>15”16</sup>.*

### CASO CONCRETO

La señora **DEISSI JULIETH VERGEL SARMIENTO** en representación de la menor **SARA VALERIA GUERRERO VERGEL**, interpone acción de tutela con el fin de que se amparen los derechos fundamentales a la salud y a la vida, presuntamente vulnerados por la **E.P.S. FAMISANAR** y por la **I.P.S. CAFAM**. En consecuencia, solicita se ordene a las accionadas agendar *“consulta oftalmología pediátrica”* y de *“todos los tratamientos que se requieran (...) para tratar medicamente el diagnóstico de cicatriz u opacidad en la córnea”* de su menor hija.

Se encuentra probado con la documental obrante en el expediente, que la menor **SARA VALERIA GUERRERO VERGEL** está afiliada al régimen contributivo en salud, en calidad de beneficiaria, con la **E.P.S. FAMISANAR**; y que tiene diagnóstico de H179 *cicatriz u opacidad de la córnea no especificada*.

Así mismo, obra la orden emitida el 16 de junio de 2023, por la pediatra Dra. Sharit Lizeth González Salinas, en la que se ordena *“CONSULTA OFTALMOLOGÍA - PEDIATRICA”<sup>17</sup>*.

Al contestar la acción de tutela, la **I.P.S. CAFAM** manifestó que no presta el servicio de oftalmología pediátrica y que, por tanto, la autorización debe ser tramitada con la **E.P.S. FAMISANAR**<sup>18</sup>.

Por su parte, la **E.P.S. FAMISANAR** al contestar la acción de tutela manifestó que, se encontraba realizando todas las gestiones administrativas pertinentes para materializar los servicios requeridos por la accionante y ordenados por el médico tratante<sup>19</sup>; sin embargo, no allegó ningún soporte documental que diera cuenta de esa afirmación.

---

<sup>14</sup> Sentencia T-890 de 2013.

<sup>15</sup> Sentencias SU-225 de 2013, T-856 de 2012, T-035 de 2011, T-1027 de 2010, T-170 de 2009 y T-515 de 2007.

<sup>16</sup> Sentencia T-970 de 2014.

<sup>17</sup> Página 08 del archivo pdf 01AccionTutela

<sup>18</sup> Página 02 del archivo pdf 06ContestaciónCafam

<sup>19</sup> Página 04 del archivo pdf 05ContestaciónFamisanar

Con el fin de validar si la **E.P.S FAMISANAR** había realizado alguna gestión tendiente a la asignación de la cita médica, el Juzgado estableció comunicación telefónica con la accionante **DEISSI JULIETH VERGEL SARMIENTO** el 15 de agosto de 2023, quien manifestó que, en efecto, la EPS le había remitido, a través de correo electrónico, un documento en el cual le informaban que ya se había autorizado la cita de oftalmología pediátrica en la **I.P.S. FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA NACIONAL – FUNDONAL** y, como soporte de ello, aportó una copia de la autorización en el que se lee lo siguiente<sup>20</sup>:

DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS PBS		
Solicitada el: 16/06/2023		
Direccionada el: 09/08/2023		
<b>Afiliado: RC. 122223527 GUERRERO VERGEL SARA VALERIA</b>		
Solicitado por: OPTICENTRO INTERNACIONAL PORTAL 80		
Ordenado por: INSTITUCIONAL		
<b>Remitido a: FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA NACIONAL FUNDONAL</b>		
Ubicación del paciente: CONSULTA EXTERNA		
Origen: ENFERMEDAD GENERAL		
Código	CANT	DESCRIPCIÓN
ISS-2001-FF890298	1	<b>CONSULTA ESPECIALIZADA POR OFTALMOLOGIA PEDIATRICA</b>

Igualmente, la accionante informó que, se había comunicado con la **I.P.S. FUNDONAL**, y que le fue agendada la cita médica de oftalmología pediátrica para el día 05 de septiembre de 2023 a las 11:20 a.m.

En ese orden, es dable concluir que la situación fáctica sobre la cual se podía pronunciar el Despacho ha desaparecido, pues el hecho alegado como vulnerador de los derechos fundamentales fue superado, y la pretensión de la accionante ya se encuentra satisfecha.

En ese sentido, la acción de tutela pierde eficacia e inmediatez y, por ende, su justificación constitucional, por lo que habrá de declararse la carencia actual de objeto por **hecho superado**.

Por último, le corresponde al Despacho verificar si en el caso bajo examen se acreditan los requisitos que permiten otorgar el **tratamiento integral**.

Sobre este punto, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela debe ordenar el suministro de todos los servicios médicos que sean necesarios para conservar o restablecer la salud del paciente, cuando la entidad encargada de ello no ha actuado con diligencia y ha

<sup>20</sup> Página 03 del archivo pdf 09AtiendeRequerimientoAccionante

puesto en riesgo los derechos fundamentales del paciente<sup>21</sup>, siempre que exista claridad sobre el tratamiento a seguir, a partir de lo dispuesto por el médico tratante.

Lo anterior ocurre, por una parte, porque no es posible para el juez decretar un mandato futuro e incierto, pues los fallos judiciales deben ser determinables e individualizables; y por la otra, porque en caso de no puntualizarse la orden de tratamiento integral, se estaría presumiendo la mala fe de la entidad promotora de salud, en relación con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones para con sus afiliados, en contravía del mandato previsto en el artículo 83 de la Constitución Política<sup>22</sup>.

En el caso concreto, encuentra el Despacho que la pretensión de tratamiento integral solicitada por la accionante no está llamada a prosperar, pues ni de las pruebas obrantes en el expediente, ni de lo dicho por las partes, se advierte que exista una negación a consultas, procedimientos o medicamentos diferentes de los ya estudiados, por lo que no es posible conceder el amparo invocado a partir de suposiciones sobre hechos futuros o con el fin de precaver hipotéticas vulneraciones a los derechos fundamentales invocados.

Finalmente, se desvinculará a la **I.P.S. CAFAM** por falta de legitimación en la causa.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

### **RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR** la carencia actual de objeto por **HECHO SUPERADO** en la acción de tutela de **DEISSI JULIETH VERGEL SARMIENTO** en representación de su menor hija **SARA VALERIA GUERRERO VERGEL**, y en contra de la **E.P.S. FAMISANAR**, por las razones expuestas en esta providencia.

**SEGUNDO: NEGAR** la solicitud de *tratamiento integral*, por las razones expuestas en esta providencia.

**TERCERO: DESVINCULAR** a la **I.P.S. CAFAM**, por falta de legitimación en la causa.

---

<sup>21</sup> Sentencias T-702 de 2007 y T-727 de 2011.

<sup>22</sup> Sentencia T-092 de 2018.

**CUARTO:** Notifíquese a las partes por el medio más eficaz y expedito, advirtiéndoles que cuentan con el término de tres (3) días hábiles para impugnar esta providencia, contados a partir del día siguiente de su notificación.

La impugnación deberá ser remitida al email: [j08lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j08lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**QUINTO:** En caso de que la presente sentencia no sea impugnada, por Secretaría remítase el expediente a la Corte Constitucional para que surta el trámite eventual de revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
DIANA FERNANDA ERASSO FUERTES  
JUEZ